



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0124/2017

FECHA: 06 de noviembre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0124/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Por escrito de 24 de octubre de 2016 remitido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el ahora reclamante solicita copia completa, debidamente foliada y testimoniada, del expediente incoado por dicha Corporación municipal para la demolición de parte de una vivienda de su propiedad. Mediante escrito de 28 de octubre de 2016 del Área Jurídica de Disciplina Urbanística, del Área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente del indicado Ayuntamiento, se traslada al reclamante que se le "reitera la posibilidad de consultar el referido expediente, especificando los documentos de los que desea obtener copia, previo pago de las tasas administrativas por las copias solicitadas, de acuerdo con el art. 37.7 y 37.8 de la Ley 30/1992".

Con posterioridad, por escrito registrado en esta Institución 19 de abril de 2017, el interesado interpone una reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, solicitando que "se ordene al Ayuntamiento de Alcalá de Henares que cumpla con

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



esa norma y me entregue la copia del expediente ref. MAC/mr” al que se refiere a continuación.

2. A través de un escrito de 21 de abril de 2017 por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente al Secretario General del indicado Ayuntamiento, a fin de que a fin de que, trasladado al órgano competente, en el plazo de quince días se formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

A través de un oficio de la Concejal de Transparencia, Innovación Social y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, registrado en esta Institución el 14 de julio de 2017, se traslada escrito de alegaciones elaborado por el Servicio de Disciplina Urbanística, así como la documentación complementaria, que puede sistematizarse como sigue:

- a. Por Resolución nº 605 de 21 de marzo de 2013 de la Concejalía de urbanismo se inicia expediente de demolición de la construcción de una terraza en la finca del ahora reclamante. A continuación, por sentencia firme del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 10 dictada en el procedimiento ordinario nº 537/2014, se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ahora reclamante frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dejando sin efecto la resolución de 21 de marzo de 2013 por caducidad del procedimiento.
- b. Mediante Resolución de la Concejalía de Urbanismo nº 2196 de 12 de julio de 2016, modificada el 8 de agosto de 2016, se inicia procedimiento de restauración de la legalidad. Frente a ella, el ahora reclamante interpone un recurso de reposición en el que, en su otrosí segundo, solicita “copia completa del expediente así como de todos los informes y escritos previos al mismo que se ha emitido por el Ayuntamiento o a su petición, tras la Sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid que puso fin a los autos 537/2014”.
- c. Considera el escrito de alegaciones, tras aludir al Criterio Interpretativo CI/008/2015 de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIBG sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, que en el presente caso resulta de aplicación su contenido.
- d. “En ningún momento se ha negado al interesado el acceso al expediente para su examen y comprobación y tampoco se niega la posibilidad de obtener copia de documentos que en ellos e contienen y precise para su defensa, pues sólo los inadecuados términos y objeto de la petición son los que dan lugar a los comunicados impugnados”.



## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24* de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas sucintamente las reglas generales sobre competencia orgánica para dictar esta Resolución, la primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en determinar el régimen jurídico aplicable a la misma en función del objeto que la ha motivado.



En este sentido, tal y como se ha manifestado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en anteriores pronunciamientos sobre la materia que ahora nos ocupa, cabe recordar que, si bien a tenor de su artículo 13 en relación con el artículo 12, la LTAIBG reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública en manos de los organismos y entidades incluidos en su ámbito de aplicación -artículo 2-, no es menos cierto que dicha norma indica en el apartado 1 de su Disposición adicional primera, tal y como ha señalado la administración municipal en sus alegaciones, que

*La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.*

Respecto a la aplicación de la Disposición Adicional Primera, apartado 1, de la LTAIBG, deben hacerse ciertas precisiones, para que pueda apreciarse su concurrencia como un motivo de inadmisión: primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso, segundo, el reclamante debe ser un interesado en el mismo y tercero, el procedimiento debe estar en curso. Analizando estos requisitos en la actual reclamación, debe concluirse que, en la fecha en la que se realiza la solicitud, concurren en el caso que nos ocupa, dado que, por una parte, son las normas del procedimiento administrativo en el que se desarrolló el expediente y se generó la información sobre la que se interesa ahora el reclamante las que serían de aplicación; por otra parte, el ahora reclamante tiene la condición de interesado, según se desprende de diferentes pasajes de los datos obrantes en el expediente; y, finalmente, el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, en cuyo seno se solicita copia de los 341 folios del expediente, no había concluido. En definitiva, debe desestimarse la reclamación presentada.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada por [REDACTED], por aplicación de lo previsto en el apartado 1 de la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para resolver las solicitudes de acceso a la información.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los



recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017)  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

